



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

SALA PLENA

18-10-17

11:23

**SENTENCIA:** 120/2017.  
**FECHA:** Sucre, 13 de marzo de 2017.  
**EXPEDIENTE:** 1021/2013.  
**PROCESO :** Contencioso Administrativo.  
**PARTES:** Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

**PRIMERA MAGISTRADA RELATORA:** Rita Susana Nava Durán.

**SEGUNDO MAGISTRADO RELATOR:** Pastor S. Mamani Villca.

**VISTOS EN SALA PLENA:** La demanda contencioso administrativa de fs. 36 a 41 planteada por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1275/2013 emitida el 7 de agosto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), la contestación de fs. 47 a 51 vta., réplica de fs. 89 a 91, dúplica a fs. 95 a 96; apersonamiento y contestación de René Chungara Cadena, mediante representación convencional, en su condición de tercero interesado de fs. 102 a 107, los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

## **I. CONTENIDO DE LA DEMANDA.**

### **I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.**

La Administración Aduanera señaló que mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) certifique la autenticidad del Certificado CM-PT-04-0035-2011 correspondiente al vehículo que ampara la Declaración Única de Importación (DUI) 2011/543/C-1633 de 24 de agosto de 2011, petición respondida mediante nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio que se remite al Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 que a su vez señala que el indicado certificado no existe y no está registrado en los archivos y base de información de la entidad, haciendo conocer además varias observaciones respecto al técnico que hubiera efectuado la inspección y la ausencia de formalidades en dicho documento, concluyendo que no fue realizado bajo procedimientos establecidos por IBMETRO.

Con ese antecedente, la Administración Aduanera consideró que la Agencia Despachante de Aduana ADA "SAA SRL", al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI N° 2011/543/C-1633 presentó un certificado medio ambiental no validado o presuntamente falso, infiriendo la inexistencia de la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO que certifique que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos de un vehículo son compatibles con los niveles establecidos o aprobados por la legislación nacional vigente.

Citando los arts. 148 del CTB, 84, 85 y 88 de la Ley General de Aduanas (LGA), 111 y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), 3° y 5° del DS 28963 así como la R.M. 357 de 1 de septiembre de 2009, el

3

demandante señaló que se presume la comisión del ilícito de contrabando contravencional tipificado en el art. 181 inc. b) del CTB, según tributos pagados de Bs. 59.972,00 equivalentes a 36.062,54 UFV's, siendo que, el 28 de septiembre de 2012 se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-016/2012 identificando como persona sindicada al importador René Chungara Cadena, con Cédula de Identidad 3072385; el 27 de diciembre de 2012, Administración Aduanera dictó la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-85/2012, declarando probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando en contra del sindicado.

Señaló que la AGIT, confirmó la resolución de alzada, exponiendo como fundamento la aplicación del procedimiento de control diferido regular, señalando que al haberse iniciado un proceso sancionatorio con la emisión del Acta de Intervención Contravencional sin observar las formalidades establecidas en el procedimiento de fiscalización aduanera posterior, se hubiera incurrido en la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa del sujeto pasivo, toda vez que al concluir el proceso en sede administrativa con la emisión de la Resolución Sancionatoria, conlleva vicios de nulidad desde la irregular emisión del Acta de Intervención provocando la nulidad de las actuaciones subsecuentes.

## **I.2. Fundamentos de la demanda.**

Refutando la fundamentación de la AGIT, la entidad demandante señaló:

Que, al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del CTB, modificado por la cláusula Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317, se emitió el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-016/2012 de la DUI 2011/543/C-1633.

Realizando una transcripción de los arts. 48 del Decreto Supremo (DS) N° 27310; 85 de la LGA; 65 y 148 del CTB; 111 del RLGA, indicó que el citado art. 48 del DS N° 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, esta prescripción faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito *sine quanon* para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.

Continúo manifestando que, el procedimiento observado en virtud al Control Diferido Regular es totalmente válido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181 inc.



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 1021/2013. Contencioso Administrativo.- Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

b) del CTB ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, los arts. 111inc. k) y 119 del RLGA, modificado por la disposición adicional tercera del DS N° 572 de 14 de julio de 2010, por lo que, en caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, tiene la facultad de disponer el destino o destrucción de las mercancías.

Afirmó que en el procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció que el certificado de IBMETRO que fuera presentado como documento de soporte de la DUI no existe y no está registrado en los archivos de IBMETRO conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio; además que los certificados tienen Código 04, cuando corresponde a la ADA Avaroa el código 03; asimismo que, el técnico que firma no se encontraba en funciones; tampoco detalla el número de factura por el servicio realizado, no se verifica el número de parte de recepción del vehículo que debe responder al vehículo inspeccionado y certificado; refirió finalmente que, no corresponde realizar una Fiscalización Posterior para que se determine si el certificado es válido o no, si él mismo IBMETRO estableció este extremo por contar con diferentes observaciones que invalidan el mismo. Con relación al procedimiento penal, señala que este tiene el único fin de determinar quién o quiénes y en qué grado fueron responsables de la emisión del certificado y no así la validez o no del certificado.

Agregó que, a partir del Informe AN-UFIPR-I-053/2012 de 27 de septiembre, las dos actuaciones notificadas al importador, el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, observaron el Certificado de IBMETRO, indicando por un lado, la existencia de la contravención aduanera de contrabando y por otra, la existencia de indicios penales por la falsedad de dicho documento; en ese sentido, recalcó que el procedimiento de control diferido regular, aprobado por la RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 no prevé el procedimiento a seguir en caso de que se encuentren indicios de la comisión de la contravención aduanera de contrabando, prevista en los arts. 160.4 y 181 inc. b) y último párrafo del CTB; sin embargo, el numeral 4. Conclusiones del Control Diferido Regular, señala que el Jefe de la Unidad de Fiscalización Regional, concluido el procedimiento de control diferido regular por los fiscalizadores, remite los informes a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados encontrados producto de la revisión. Siendo evidente que el Procedimiento de Control Diferido no hace referencia al procedimiento a seguir en caso de que se determine la existencia del ilícito de contrabando, en aplicación de la jerarquía normativa establecida en el art. 5 del CTB, corresponde aplicar el procedimiento correspondiente a un caso de contrabando contravencional, que se cumplió a cabalidad en el presente caso.

Concluyó señalando que, la AGIT hizo una interpretación incorrecta de la norma al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, causando además perjuicio a la Administración Aduanera al anular obrados sin justificativo o normativa específica que determine que debe realizarse un procedimiento

de Fiscalización Posterior, pues el numeral 4 del Procedimiento del Control Diferido, establece de existir indicios de tributos omitidos coordinará para que a través de la Gerencia Nacional de Fiscalización se emita la Orden de Fiscalización, pero en el presente, el Control Diferido Regular ha establecido la existencia del ilícito de contrabando y no así tributos omitidos, por lo que no corresponde realizar un proceso de Fiscalización Posterior, de ahí que conforme los arts. 156 y 157 del CTB se evacuo el Acta de Intervención.

### **I.3. Petitorio.**

Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1275/2013 de 7 de agosto por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-85/2012 de 27 de diciembre.

## **II. DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.**

La AGIT se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 14 de agosto de 2014, que cursa de fojas 47 a 51 vta., señalando que los argumentos de la demanda no desvirtúan la fundamentación de la resolución jerárquica, más aun cuando es una reproducción de los fundamentos expuestos en instancia administrativa recursiva, no pudiendo este Tribunal suplir la carencia de la carga argumentativa del demandante.

**II.1.** Señaló también que, el Procedimiento de Control Diferido Regular, aprobado por la RD N° 01-004-09 no prevé el modo en el que se debe actuar en casos en los que se encuentren indicios de comisión de contravención aduanera de contrabando según los arts. 160.4 y 181 inc. b) y último párrafo del CTB; sin embargo, el numeral 4 -Conclusión del Control Diferido Regular- señala respecto de las facultades del Jefe de la Unidad de Fiscalización Regional: "Concluido el proceso de control diferido regular por los fiscalizadores, se procede de acuerdo a lo siguiente: 3. A la conclusión del control diferido regular, la remisión de informes a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados encontrados producto de la revisión"; consecuentemente, el objetivo específico del procedimiento de control diferido es comprobar que los datos declarados en las DUI y los documentos adjuntos sean correctos, completos y exactos según lo establecido en la normativa aduanera, pues en atención al art. 48 del DS N° 27310, la Administración Aduanera tiene facultades de control, ejercidas en conformidad a los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho y control diferido, y la verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior, y siendo que el art. 49 del citado DS indica que la AN ejercerá las facultades de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los arts. 21, 100 y 104 de la mencionada Ley, la Administración Aduanera, deberá ampliar la investigación realizando una Fiscalización Aduanera Posterior, para que se diluciden por vía que corresponda, las observaciones planteadas.



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 1021/2013. Contencioso Administrativo.- Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Afirmó que, al darse inicio a un proceso sancionatorio emitiendo el Acta de Intervención Contravencional sin observarse las formalidades establecidas en el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, cuya existencia es encaminar el debido proceso para ambas partes y concluir el proceso en sede administrativa con la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contracencional, conllevaba vicios de nulidad, desde la irregular emisión del Acta de Intervención, provocando la nulidad de las actuaciones subsecuentes, por lo que en aplicación del art. 36.II de la Ley de Procedimiento Administrativo correspondió anular actuados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional.

Con relación al argumento del proceso penal y la supuesta inseguridad jurídica por fallos distintos, aclaró que estos fueron recurridos por el sujeto pasivo y por la Administración Aduanera al mismo tiempo, y siendo que el sujeto pasivo solicitó valoración de sus pruebas la AGIT en su Resolución Jerárquica se ve impedida de valorar pruebas pendientes de valoración por la autoridad jurisdiccional; en el presente caso la Resolución de Alzada solo fue recurrida por la Administración Aduanera la cual no solicitó la valoración de sus pruebas sino ingresó al fondo, por lo que, la AGIT al emitir su fallo realizó un correcto análisis de la causa fallando como corresponde, desvirtuándose el argumento de que se crea una supuesta inseguridad jurídica con los fallos ya que se trata de procesos diferentes.

Señaló como precedente tributario las Resoluciones Jerárquicas: AGIT-RJ/1055/2013, AGIT-RJ/1068/2013, AGIT-RJ/1069/2013, AGIT-RJ/1223/2013, AGIT-RJ/1224/2013, AGIT-RJ/1250/2013, AGIT-RJ/1252/2013, AGIT-RJ/1253/2013, AGIT-RJ/1254/2013, AGIT-RJ/1255/2013, AGIT-RJ/1256/2013, AGIT-RJ/1257/2013, AGIT-RJ/1258/2013, AGIT-RJ/1259/2013, AGIT-RJ/1260/2013, AGIT-RJ/1261/2013, AGIT-RJ/1262/2013, AGIT-RJ/1263/2013, AGIT-RJ/1264/2013, AGIT-RJ/1265/2013, AGIT-RJ/1266/2013, AGIT-RJ/1267/2013, AGIT-RJ/1268/2013, AGIT-RJ/1269/2013, AGIT-RJ/1270/2013, AGIT-RJ/1271/2013, AGIT-RJ/1272/2013, AGIT-RJ/1273/2013, AGIT-RJ/1274/2013, AGIT-RJ/1276/2013, AGIT-RJ/1277/2013, AGIT-RJ/11278/2013, AGIT-RJ/1279/2013, AGIT-RJ/1280/2013, AGIT-RJ/1281/2013, AGIT-RJ/1282/2013, AGIT-RJ/1279/2013, AGIT-RJ/11280/2013, AGIT-RJ/1281/2013, AGIT-RJ/1282/2013, AGIT-RJ/1283/2013, AGIT-RJ/1284/2013, AGIT-RJ/1285/2013, AGIT-RJ/1287/2013, AGIT-RJ/1288/2013, AGIT-RJ/1289/2013, AGIT-RJ/1290/2013 Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 0824/2012 DE 20 DE AGOSTO DE 2012.

Finalizó refiriendo que, la demanda contencioso administrativa incoada, carece del sustento jurídico-tributario y no existe agravio ni lesión de derechos que se le hubieren causado con la Resolución ahora impugnada.

## II.2. Petitorio.

Solicitó se declare improbadamente la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la AN, manteniendo firme y subsistente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-1275/2013 de 7 de agosto, emitida por la AGIT.

### **III. CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.**

René Chungara Cadena, mediante memorial de fs. 102 a 107 y representación convencional, se apersonó al proceso y haciendo un recuento de lo antecedentes administrativos, con relación a la demanda contencioso administrativa presentada por la Administración Aduanera señaló que no se puede indicar que el certificado medioambiental presentado sea falso, puesto que fue emitido por IBMETRO y verificado por funcionarios de la AN, quienes autorizaron el levante respectivo.

**III.1.** Agregó que en el despacho aduanero se cumplió lo establecido en el art. 2 del DS 784, que modifica el art. 101 del DS 25870, esto es que la DUI sea completa, correcta y exacta, pues se evidencia que esta contiene todos los datos requeridos, no contiene errores de llenado, tachaduras o enmiendas, y por último, coinciden todos los datos registrados con la documentación soporte contenida en la carpeta del despacho.

Indicó además, que el informe de IBMETRO no establece que el funcionario que emitió los certificados, no fue funcionario de la institución en las fechas en que estos fueron emitidos, y tampoco determina de forma clara que dicho documento sea falso, siendo todavía una presunción.

Con relación al art. 88 de la Ley N° 1990, de la misma forma para la desaduanización del vehículo automotor, manifestó haber cumplido con el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y como consecuencia se emitieron el levante y pase de salida, por lo que de acuerdo a lo referido en el artículo en análisis, la mercancía correspondía permanezca en el territorio aduanero y por supuesto la circulación en el territorio nacional. Existiendo además una errónea interpretación del art. 119 del D.S. 25870, modificado por el D.S. 572, toda vez que el mismo señala que se deberá disponer el destino o destrucción de las mercancías, más no refiere el decomiso o la emisión de actas de intervención. Siendo además que en el supuesto caso que no existiera en la carpeta el DUI 2011/543/C-1633, la certificación y el incumplimiento a las disposiciones legales, la administración tributaria debió considerar la sanción por no adjuntar el documento soporte, toda vez que dicho acto no afecta al tributo aduanero; que este tratamiento es totalmente diferente a las Autorizaciones Previas, por el incumplimiento que genera al tomar una decisión como ser el decomiso a través de un Acta de Intervención.

Refieren además que, la DUI 2011/543/C-1633 fue memorizada, validada y aceptada por la Administración Tributaria, razón por la que se emitió el levante y pase de salida, siendo el documento legal la DUI. Asimismo se tiene que el documento presentado por parte de la Unidad de Fiscalización y la Gerencia Regional de Potosí, no señala que la DUI es o no válida, por lo que no pueden indicar la falsedad o no de dicho documento, más aún porque no es parte de su competencia o función la determinación de ese extremo, en consecuencia mientras no se determine la falsedad o no de la DUI no se puede establecer como contrabando la introducción al país del vehículo.

Advirtió que, el demandante no cumplió los procedimientos legalmente establecidos, pues dentro del Procedimiento de Control Diferido Regular no



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 1021/2013. Contencioso Administrativo.- Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

habría existido la emisión de actas de intervención, menos las Resoluciones, siendo además que los actos realizados por la administración Tributaria mediante el referido Procedimiento resultan ser erróneos, pues lo que correspondía era una Fiscalización Aduanera Posterior, conforme prevé la Resolución de Directorio RD 01-008-11 de 22 de diciembre de 2011, de otra forma se estaría vulnerando los derechos del sujeto pasivo constituidos en la Carta Magna. Con relación a que la Unidad de Fiscalización al efectuar el CRD dio cumplimiento expreso a la RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 aseguró que, dicha disposición se refiere a los actos a realizar a nombre del sujeto pasivo, en la etapa de despacho aduanero, y no así en los procesos de Control Diferido Regular y Fiscalización Aduanera Posterior, y que los actos administrativos que provengan de estas acciones no están inmersas con la obligatoriedad hacia el Despachante de Aduana de comunicar al importador o consignatario. Por lo que se habría realizado una interpretación errónea de la norma por parte de la Administración Tributaria.

Concluyó manifestando que, las notificaciones deben ajustarse a lo establecido por los arts. 38 y 83 del CTB, y 33 de la Ley N° 2341, no habiendo cumplido el debido proceso la Aduana, se considera que todo queda nulo por no ajustarse a las formas establecidas.

### III.2. Petitorio.

Solicitó se declare improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta y se mantenga firme y subsistente la resolución jerárquica AGIT-RJ-1275/2012 de 07 de agosto.

### IV. DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de anular lo obrados, con reposición hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-016/2012 de 28 de septiembre, ordenando a la Administración Aduanera concluir el procedimiento de control diferido, elevar informe y coordinar el inicio de una fiscalización mediante la orden correspondiente. Al efecto señaló que, el art. 48 del DS N° 27310 establece que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control previstas en los arts. 21 y 100 del CTB que facultan a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito *sine quanon* para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados.

También adujo que la AGIT realizó una interpretación incorrecta al pretender que se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho ya demostrado en el Control Diferido Regular, pues no existe justificativo o normativa específica que determine que debe realizarse un procedimiento de Fiscalización Posterior.

Por su parte, la autoridad demandada indicó que la Administración Aduanera al dar inicio a un proceso sancionatorio emitiendo el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-016/2012, no observó las formalidades establecidas en el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, vulnerando los derechos al debido proceso y a la

defensa del sujeto pasivo, provocando la nulidad de las actuaciones subsecuentes.

## **V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.**

A efectos de resolver y, en el marco de la controversia planteada, corresponde señalar que los antecedentes acopiados en sede administrativa y los que cursan en el cuaderno del proceso informan lo siguiente:

1. Que, el 25 de mayo de 2012, la Administración Aduanera solicitó la remisión de 77 DUI a la ADA "SAA SRL", tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa de fs. 13 del Anexo 2; el 01 de junio de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite: SAA-208/2012, remitió la documentación requerida cursante de fs. 14 a 18.
2. Mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 de 06 de junio, la Administración Aduanera solicitó a IBMETRO certifique la autenticidad de certificados medioambientales emitidos por esa entidad, adjuntando un anexo con el detalle de 77 certificados de fs. 23 a 25 del Anexo 2.
3. En respuesta IBMETRO, con nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio, remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto, el cual indica que una vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, se informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO, además, que los funcionarios que figuran y firman los certificados, no se encontraban prestando funciones en las fechas de emisión, cursante de fs. 26 a 33.
4. El 27 de septiembre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el Informe AN-UFIPR-I-053/2012, Control Diferido Regular DUI C-2011/543/C-1633 por el que se evidenció la falta del certificado medioambiental de IBMETRO y los indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando, cursante de fs. 41 a 50 del Anexo 2.
5. El 5 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a René Chungara Cadena con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-016/2012 de 28 de septiembre, emitida en su contra -fs. 61 a 69-.
6. El 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a René Chungara Cadena con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-085/2012 de 27 de diciembre, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra, al no existir la mercancía comisada, se impuso como multa el pago del 100 % del valor de la mercancía, la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención, la anulación de la DUI 2011/543/C-1636 de 24 de agosto de 2011, y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación, cursante de fs. 76 a 83 del Anexo 2.





Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 1021/2013. Contencioso Administrativo.- Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

7. Planteado recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca (ARIT) mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0112/2013 de 13 de mayo, **anuló** la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-085/2012 de 27 de diciembre, con reposición de obrados hasta la notificación con el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI 016/2012 de 28 de septiembre, ordenando a la Administración Aduanera notificar dicho acto, en la forma que asegure el conocimiento efectivo de la imputación en su contra, de fs. 71 a 76 vta. del Anexo 1.
8. La Administración Aduanera, interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución Jerárquica impugnada en el presente proceso, con la que la AGIT confirmó la resolución de alzada, empero, **anuló** obrados hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-016/2012, ordenando a la Administración Aduanera concluir el procedimiento de control diferido, elevar informe y coordinar el inicio de una fiscalización mediante la orden correspondiente de fs. 117 a 126 del Anexo 1.

## VI. ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

### VI.1. Respecto al Procedimiento de Control Diferido.

El art. 48 del Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de: **i)** Control anterior, **ii)** Control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y, **iii)** Control diferido. La norma citada prevé también que la verificación de la calidad, valor en aduana, origen y otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrá ser objeto de fiscalización posterior.

En dicho marco normativo, la Administración Aduanera emitió el Procedimiento de Control Diferido aprobado con RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que establece como objetivo general, en aplicación del art. 48 del DS 27310 efectuar la revisión de las Declaraciones Únicas de Importación, verificando la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante de las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero.

Entre los objetivos específicos señala:

- a) Comprobar que los datos declarados en las declaraciones de mercancía y en los documentos adjuntos de respaldo sean correctos, completos y exactos conforme lo establecido en la normativa aduanera, así como también el cumplimiento de las formalidades previas al despacho.
- b) Encausar los hallazgos determinados (contravenciones, omisiones de pago u otros) de acuerdo a la normativa vigente, en los casos que corresponda.

En autos, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i. de la Aduana Nacional, solicitó al Gerente Regional Potosí, instrucción de control diferido regular, en razón de haberse evaluado la importación de vehículos usados por personas naturales y empresas unipersonales a través de la Administración de Aduana Frontera Avaroa en la gestión 2011, habiéndose identificado posibles riesgos, como certificados medioambientales posiblemente falsos, chasis que no se pueden decodificar, incoherencia de datos entre los declarados en la DUI y lo consignado en el INFOEX, registro en el RUAT de la clase del vehículo diferente al consignado en la DUI, vehículos que habrían sido importados directamente de ultramar sin consignar el B/L en la página de documentos adicionales de la DUI y otros.

Con ese antecedente se solicitó a la Agencia Despachante de Aduana SAA S.R.L., la remisión de la documentación original, cumpliendo con el punto B.1 y 3 del Procedimiento en análisis.

El punto 4. Conclusión del Procedimiento Diferido Regular, señala expresamente lo siguiente: Concluido el procedimiento diferido regular por los fiscalizadores, si no se identificaron indicios de la comisión de ilícitos tributarios y observaciones al valor, el Jefe de la Unidad de Fiscalización Regional devuelve las carpetas de documentos al Despachante de Aduana o al operador, sin que ello signifique que no se pueda realizar una fiscalización aduanera posterior.

El punto 4.2. Prevé: "si durante el control diferido se establece la presunta comisión de contravenciones aduaneras, conforme lo establecido en el art. 160-5) y 6) del Código Tributario (incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas en leyes especiales), el art. 186 de la Ley General de Aduanas (contravenciones aduaneras) y el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente, emite informe y remite conjuntamente el expediente a la Unidad Legal para la aplicación del sumario contravencional establecido en el art. 168 del CTB y el Manual de Procesamiento de Contravenciones Aduaneras", se concluye entonces que dicho procedimiento no es aplicable al procesamiento del contrabando contravencional señalado por el art. 160-4) del CTB.

Consecuentemente, es evidente que no existe un procedimiento establecido para los casos en los que se presume la existencia de contrabando; sin embargo, el numeral 4.3 de la norma en análisis señala: "**A la conclusión del control diferido regular, los Jefes de las Unidades de Fiscalización remitirán informe en conclusiones a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados encontrados producto de la revisión**", norma que debió aplicarse en el caso presente, para que se disponga el inicio del procedimiento correspondiente, en el marco de lo señalado por el art. 48 del DS 27310 RCTB.

Con relación a la afirmación de la entidad demandante en sentido de que el art. 48 del DS N° 27310 RCTB, faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito *sine quanon* para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de



Estado Plurinacional de Bolivia

Órgano Judicial

Exp. 1021/2013. Contencioso Administrativo.- Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB se tiene que, la citada norma reconoce a la Aduana Nacional -en el marco de los arts. 21 y 100 del CTB- la potestad para ejercer sus facultades en las fases de **control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido.**

Adicionalmente la norma señala: "La verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior", entendiéndose que aún en los casos en los que, realizadas las operaciones de control anterior, durante y posterior, no pudieran comprobarse algunos aspectos, la Administración Aduanera tiene facultad para realizar una fiscalización posterior, concluyéndose que ésta es una potestad de control otorgada por la normativa que se extiende más allá de agotadas las fases de control, porque todavía puede realizarse la fiscalización de aquellos aspectos (calidad, origen u otros), lo cual no significa de ninguna manera que sea una opción que puede o no ejecutarse como interpretó erróneamente la demandante, concluyéndose que en el caso, debió efectuarse la fiscalización señalada por la norma analizada.

En coherencia con el análisis anterior, resulta evidente que en el caso particular motivo del proceso, la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, vició de nulidad sus actos; consecuentemente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1275/2013 de 7 de agosto, es correcta.

**POR TANTO:** La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando **IMPROBADA** la demanda de fojas 36 a 41 vta., interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1275/2013 de 7 de agosto dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a quien se devolverán los antecedentes administrativos.

No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán quien se constituyó en primera relatora y es disidente a la presente Sentencia.

**Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad demandada.**

*Regístrese, notifíquese y archívese.*

  
Pastor Segundo Mamani Villca  
**PRESIDENTE**

  
Jorge Isaac von Borries Méndez  
**DECANO**

  
Rómulo Calle Mamani  
**MAGISTRADO**

Exp. 1021/2013. Contencioso Administrativo.- Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

  
Antonio Guido Campero Segovia  
MAGISTRADO

  
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano  
MAGISTRADO

  
Norka Natalia Mercado Guzmán  
MAGISTRADA

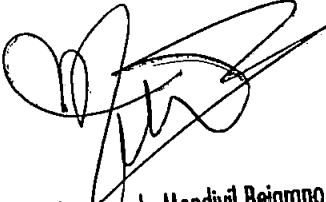
  
Maritza Suntura Juaniquina  
MAGISTRADA

  
Fidel Marcos Tordoya Rivas  
MAGISTRADO



  
Sandra Magaly Mendivil Bejarano  
SECRETARIA DE SALA PLENA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA SALA PLENA
GESTIÓN: 2013
SENTENCIA N° 120... FECHA 13 de marzo
LIBRO TOMA DE RAZÓN N° 1/2013
Dr. Rolo S. Muc Dwan VOTO DISIDENTE: .....

  
MSc. Sandra Magaly Mendivil Bejarano  
SECRETARIA DE SALA  
SALA PLENA  
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

## VOTO DISIDENTE

La Magistrado Dra. Rita Susana Nava Duran, presenta su voto disidente a la Sentencia N° 120/2013 de 13 de marzo del Expediente N° 1021/2013 que declara **IMPROBADA** la demanda de la Gerencia Regional Potosí dependiente de la Gerencia General de la Aduana Nacional de Bolivia representada por Manuel Feliz Sangüesa Guzmán contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, según los siguientes fundamentos:

### 1. FUNDAMENTACION DEL VOTO DISIDENTE

Lamentando no compartir el criterio mayoritario de los magistrados del Tribunal Supremo, seguidamente se fundamenta el voto disidente en los siguientes términos:

1. Conforme al objeto de controversia que se refiere a: *“Si el art. 48 del D.S. 27310 faculta a la Administración de Aduana a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece validar las conclusiones del procedimiento de control posterior regular, con un proceso de fiscalización, sobre todo si se ha determinado que la DUI no cuenta con los documentos de soporte válidos, al no existir certificaciones medioambientales y si existe o no en el control diferido un procedimiento en caso que se determine la existencia del ilícito de contrabando contravencional”*, en el caso del Exp. 944/2013, se ha motivado de la siguiente forma:
  - a) En el presente caso, se debe realizar una revisión de la normatividad vigente para resolver el presente caso, con ese objetivo se tiene que el art. 181 último párrafo del Código Tributario, claramente determina que: *“Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's 50.000 (Cincuenta Mil Unidad de Fomento de Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código (con las modificaciones de la Ley 100 de 4 de abril de 2011), de tal forma que en los casos prescritos en el art. 181 del Código Tributario cuando el valor del tributo omitido alcance hasta 50.000 UFV se debe seguir el procedimiento prescrito en el Capítulo III del Título IV del código tributario referido al sumario contravencional. Por otro lado, la RND N° 01-004-09, en el numeral 4 (Conclusión del Control Diferido Regular) subnumeral 2 señala: *“Si durante el control diferido, se establece la presunta comisión de contravenciones aduaneras, conforme lo establece el art. 160 numerales 5 y 6 del Código Tributario, el art. 186 de la Ley General de Aduanas y el Anexo de Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones vigente, emite informe y los remite conjuntamente con el expediente a la Unidad Legal para la aplicación de sumario contravencional establecido en el art. 168 del CTB y el Manual de procesamiento de contravenciones Aduaneras”*, de modo tal que en la RND N° 01-004-09 incluye como contravenciones aduaneras a ser procesadas mediante sumario contravencional, las señaladas en el art. 160 numerales 5 y 6 (incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas en leyes especiales), las dispuestas en el 186 de la Ley General de Aduanas y el Anexo de Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones. Y por otro lado, la misma RND N° 01-004-09 en el numeral 4 (Conclusión del Control Diferido Regular) subnumeral 3, dispone: *“A la conclusión del control diferido regular, los Jefes de las Unidades de Fiscalización remitirán informe en conclusiones a la Gerencia Nacional de Fiscalización sobre los resultados efectuados producto de la fiscalización”*, es decir se prevé un procedimiento de fiscalización posterior pero para los casos no previstos en el art. 160 numerales 5 y 6 (incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas en leyes especiales), las dispuestas en el 186 de la Ley General de Aduanas, el Anexo de Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones y los dispuestos en el art. 181 del Código Tributario.*

- b) En el presente caso, conforme al Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-031/2012 de 28 de septiembre de 2012 (fs. 51 a 58 del Anexo Administrativo 2) se inició control diferido regular porque se habría incurrido en el ilícito de contrabando contravencional al no alcanzarse los 50.000 UFV del valor tributo omitido del valor de la mercancía, tipificado en el art. 181 inc. b) del Código Tributario, que dispone: *“Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: ... b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales”* y la comisión del tipo de contrabando contravencional antes indicada, fue ratificado en la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS- 56/2012 de 27 de diciembre de 2012, de tal modo que al presumirse comisión de contrabando tipificado en el art. 181 inc. b) del Código Tributario y que el valor del tributo omitido de la mercancía se encontraba dentro del rango de los 50.000 UFV, se debía seguir directamente el proceso prescrito en el art. 181 último párrafo del Código Tributario, es decir el dispuesto en el art. 168 del Código Tributario que determina: *“I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad”*.
- c) En conclusión en el caso de análisis, no interesa si se infringió o no el art. 48 del D.S. 27310 y si existía un supuesto vacío en cuanto al procedimiento a seguir en el caso de contrabando contravencional en la RND N° 01-004-09, cuando el art. 181 último párrafo del Código Tributario, era claro en cuanto al procedimiento a seguir en caso de contrabando contravencional cuando alcance los 50.000 UFV del tributo omitido del valor de la mercancía que era el dispuesto para sumario contravencional, conforme a lo dispuesto en el art. 168 del Código Tributario. De acuerdo, al razonamiento anterior, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1224/2013 de 29 de julio del 2013, obró correctamente al confirmar la Resolución de Recurso de Alzada N° ARIT/CHQ/RA 0102/2013 de 6 de mayo de 2013 que anulaba obrados hasta el acta de intervención contravencional, empero confundió el procedimiento a seguir, por ello corresponde declarar improbadamente la demanda y corregir de oficio el procedimiento a seguir.
2. Igualmente en la Sentencia N° 452/2015 de 7 de octubre de 2015, donde se ha presentado disidencia, con relación al punto de controversia referido a: *“Si los funcionarios de la UTISA que elaboraron el Acta de Intervención, incumplieron o no con el procedimiento de importación de consumo previsto en*

la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 y debieron notificar o no al declarante importador el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor”, se ha realizado la siguiente fundamentación de sustento de la disidencia:

- a) Para resolver el objeto de controversia planteado se debe inexcusablemente referirse a las normas que se cuestionan de infringidas, con ese objetivo se tiene que la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 establece los trámites y formalidades previas para el régimen aduanero de importación para el consumo, que de forma resumida incorporaba el siguiente procedimiento: a) Transmisión electrónica de datos de la Declaración Única de Importación; b) El Sistema Informático de la Aduana Nacional valida los datos para aceptar o no la Declaración Única de Importación; c) Corrección de datos de Declaración Única de Importación o desistimiento si correspondiere; d) Pago de Tributos aduaneros; e) Determinación del canal de la Declaración Única de Importación (Amarillo, Verde, Rojo); f) Examen Documental y Físico; g) En caso de existir observaciones se facciona Acta de Reconocimiento/ Informe de Variación de Valor; h) Si el Declarante no acepta los resultados del Acta de Reconocimiento/ Informe de Variación de Valor debe presentar su impugnación dentro del plazo de 5 días; i) Si el Declarante acepta los resultados del Acta de Reconocimiento/ Informe de Variación de Valor, paga los tributos respectivos dentro del plazo de 3 días; j) Si ha se observado la Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor se puede presentar descargos hasta antes de la Resolución Administrativa; l) En caso de no aceptación del Acta de Reconocimiento/ Informe de Variación de Valor para el levante de la mercancía puede presentar garantías; y m) Levante de la mercancía. En el análisis de normas se debe considerar también que el D.S. N° 25567 de 5 de noviembre de 1999 (Reglamento de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros) que en su art. 1 establece que la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA) tiene por objeto efectuar el control por sustitución temporal y sorpresiva a los funcionarios responsables de la Aduana Nacional, a efectos de comprobar la correcta aplicación de la normativa aduanera, desarrollando a este fin planes, estrategias, métodos y sistemas de seguimiento, inspección y control del desenvolvimiento aduanero, en la mismo Decreto Supremo en su art. 5 sobre las competencias de la Unidad se dispone que: *“La Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros, (UTISA), tiene competencia como organismo operativo especializado para ejercer el control de gestión por sustitución temporal y sorpresiva sobre todas las reparticiones o unidades orgánicas que integran la Aduana Nacional. La Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros podrá actuar ante terceros, por efecto de la sustitución temporal, con las mismas facultades y atribuciones establecidas para los sustituidos”*. De tal forma que Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros, (UTISA) tiene por objeto efectuar el control por sustitución temporal y sorpresiva a los funcionarios responsables de la Aduana Nacional, a efectos de comprobar la correcta aplicación de la normativa aduanera y para el cumplimiento de este objeto tiene la competencia de ejercer el control de gestión por sustitución temporal y sorpresiva sobre todas las reparticiones o unidades orgánicas de la Aduana Nacional con las mismas atribuciones de la unidad intervenida y debiendo seguir el procedimiento determinado en la Ley.
- b) En el caso de autos, en el despacho aduanero de consumo presentado por la Agencia Despachante de Aduanas Bona Fide S.R.L. siendo el importador Roberto Vladimir Sandoval Rios de una Camioneta MAZDA, tipo B2300, modelo 2006 de la DUI C- 9430, fue determinado a canal rojo y se asignó el despacho al funcionario aduanero Juan Antonio Gutierrez Vacaflor y a la intervención de funcionarios de la Unidad

Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros se faccionó la Acta de Intervención Contravencional AN-UTIPC-AIC 008/09 de 18 de agosto de

2009 emitida por Inspectores de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros, habiéndose suspendido el procedimiento aduanero correspondiente y posteriormente se expidió, Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/165/09 de 22 de septiembre de 2009.

- c) Con los anteriores, antecedentes se evidencia que el procedimiento aduanero de consumo fue suspendido y se dictó Acta de Intervención Contravencional AN-UTIPC-AIC 008/09 de 18 de agosto de 2009 emitida por Inspectores de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros y posteriormente se emitió Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/165/09 de 22 de septiembre de 2009, empero como en el caso se autos se cuestiona si el procedimiento seguido por funcionarios de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros se ajusta al previsto en la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, se debe tener presente que la citada Resolución de Directorio establece el trámite y formalidades previas para el régimen aduanero de importación para el consumo, sin embargo no preveía explícitamente un procedimiento para el caso de contravenciones aduaneras y por ello en el numeral V inc. B subinciso 2.19 de la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 determina que: *“ Cuando exista comisión de delitos aduaneros o contrabando contravencional, elabora el acta de intervención y la remite conjuntamente al Expediente de Reconocimiento al Administrador de Aduanas, para que este inicie el proceso administrativo en caso de contrabando contravencional o ponga en conocimiento del fiscal adscrito a la Aduana Nacional, el ilícito en caso de delitos aduaneros...”*, de tal forma que el procedimiento al que se remite la RD 01-031-05 es el dispuesto en el art. 168 del Código Tributario que dispone: *“I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de este Código. III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad”*, de tal forma que el procedimiento a seguir en caso de contravención aduanera, como en el presente caso, es la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional o Acta de Infracción, que se notifica importador o declarante y se abre término probatorio de 20 días concluido el mismo se emite Resolución Final de Sumario



Contravencional y a esta resolución se pueden interponer los recursos administrativos de Ley.

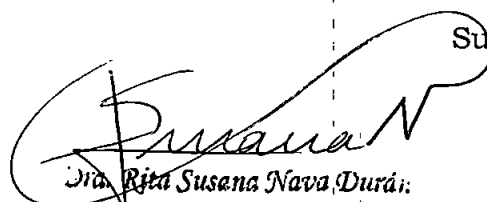
- d) En el presente caso en conclusión no se siguió el procedimiento determinado en el art. 168 del Código Tributario y al cual se refería el Numeral V inc. B subinciso 2.19 de la RD 01-031-05 de

19 de diciembre de 2005, siendo procedente declarar probada esta pretensión del demandante no habiendo los funcionarios de la UTISA que elaboraron el Acta de Intervención, seguido el procedimiento para contravención aduanera previstos al que se remitía la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 y en este caso tampoco era necesario notificar al declarante o importador el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor que era para un procedimiento regular de importación de consumo.

## **2. FALLO QUE DEBE TENER LA SENTENCIA**

En base a la fundamentación jurídica y de hecho precedente, la Magistrada que firma al pie, considera que el fallo de la sentencia debe reconducir el procedimiento a seguir en caso de contrabando contravencional en los casos previstos en el art. 181 del Código Tributario y seguir el procedimiento a que remite dicho artículo que es el previsto en el art. 168 (Sumario contravencional) del Código Tributario.

Sucre, 13 de marzo del año 2017

  
Dña. Rita Susana Nava Durá:  
MAGISTRADA  
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA